



TAREA COMPLEJA

Pacificar el país

En México, a los gobernantes les toca coordinar; a los ciudadanos, exigir que asuman sus responsabilidades y respeten los derechos humanos

POR JUAN CARLOS MONTERO

La seguridad pública se ha convertido en un tema de mucha preocupación para los ciudadanos, políticos y empresarios de México. Las encuestas de opinión demuestran que éste es uno de los temas de mayor interés para los mexicanos; además, las encuestas sobre percepción de la seguridad exponen que los mexicanos se sienten muy inseguros y el tema ocupa un lugar importante en los análisis de riesgo país.

La seguridad es un tema complejo y multivariable, lo que se reconoce en el Artículo 21 constitucional al señalar que "la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social". Para lograr los fines establecidos en la Constitución, se considera que "la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas".

Esta definición implica que la responsabilidad de la seguridad pública está depositada de forma diferenciada en la Federación, los estados y los municipios, y, asimismo, al interior de cada orden de gobierno participan los actores responsables de la prevención, investigación, persecución, principalmente policías, ministerios públicos, fiscales, jueces e instituciones penitenciarias. Además de los problemas específicos de seguridad, un problema adicional es la necesidad de coordinación entre cada uno de los actores al interior de cada orden de gobierno, así como entre órdenes de gobierno.

Cuando hablamos de seguridad, implicamos distintos temas, o al hablar de inseguridad, identificamos distintos problemas, según el contexto en que nos encontremos. Nunca será lo mismo hablar de seguridad o inseguridad en Yucatán, Ciudad de México, Chihuahua o Tamaulipas, ni siquiera entre los más de 2,000 municipios de México. Cada municipio, cada estado, tienen problemas y responsabilidades específicos, pero, en muchos casos, los problemas son transversales, lo que hace necesaria la coordinación al interior de los gobiernos —entre policías y fiscales, por ejemplo—, pero también entre ellos, por citar algunos, para intercambiar inteligencia.

Sin embargo, los problemas de coordinación son aprovechados por los delincuentes. Los infractores pueden aprovechar los problemas de coordinación municipal al cruzar de un municipio a otro; ladrones, secuestradores y narcotraficantes pueden cometer un delito en un estado y esconderse en otro. Cualquiera de ellos puede utilizar las instituciones financieras nacionales e internacionales para ocultar los productos de su actividad ilícita. Mien-

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN MÉXICO REQUIERE DE LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS DE TODOS LOS ACTORES



tras tanto, los gobiernos deben coordinarse para prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera efectiva.

Al hablar de los problemas de seguridad en México, corremos el riesgo de simplificarlos y perder de vista la complejidad implicada en cada tema. El riesgo no es sólo para los analistas, sino también para los tomadores de decisiones, que podrían cometer el error de considerar que pueden enfrentar los problemas solos o que pueden dejar en manos de un solo actor la responsabilidad de algún tema.

Recientemente, la autonomía de las fiscalías generales ha comenzado a exponer los problemas de coordinación entre los gobernadores y los fiscales para enfrentar la criminalidad en las entidades federativas, lo cual se suma a los ya tradicionales enfrentamientos que había entre gobernadores y presidentes municipales por temas específicos de seguridad pública. Por otro lado, los gobernadores de algunos estados parecen asumir una posición muy cómoda al responsabilizar al gobierno federal de sus problemas de seguridad.

La construcción de la paz requiere de la coordinación de esfuerzos entre todos los actores, superando las diferencias políticas y asumiendo la responsabilidad que corresponde a cada quien. A los gobernantes les corresponde la tarea de la definición y coordinación de estrategias; a los ciudadanos nos corresponde la vigilancia y exigencia para que las autoridades no evadan y asuman sus responsabilidades, con apego al Estado de Derecho y especial respeto a los derechos humanos. Sin este reconocimiento de responsabilidades, asumiendo que la seguridad sólo es asunto del gobierno o de un solo gobierno, se implementarán estrategias limitadas, incompletas e insuficientes que no permitirán alcanzar la paz. ■

Juan Carlos Montero Bajamilla es doctor en Política Pública y maestro en Gestión Pública. Aplicado por el Tecnológico de Monterrey. Formó parte de la Facultad de Gobierno y Ciencias Sociales, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

ILUSTRACIONES: HOSKINS/STERN